

Politizar el malestar profesional: ¿qué puede aprender el trabajo social del movimiento por la vivienda?

Politicising professional malaise: what can social work learn from the pro-housing platform?

Sergio García García¹ y Xavi Martínez Ramírez²

Resumen

El artículo apuesta por una politización del trabajo social profesional a la luz de la situación de emergencia social provocada por el espectacular aumento de las desigualdades sociales, y específicamente por la exclusión residencial. Se entiende por politización no tanto la incidencia política en las reformas sociales como el proceso por el cual la propia labor profesional deviene potencia de transformación a partir del reordenamiento de los roles y el establecimiento de alianzas lo más horizontales posibles con las personas afectadas directamente por los problemas sociales y los colectivos organizados para hacer explícito el conflicto estructural que los genera. Si el problema de la vivienda ha sido el principal problema social en las últimas décadas en el Estado español, es también el disparador de las iniciativas de empoderamiento colectivo más interesantes que se han dado en nuestras ciudades y barrios. Aprender de estos procesos desde la propia profesión y colaborar en sus modos de acción desde el interior de la institución puede abrir los posibles bloqueadores en el actual modelo asistencial de trabajo social.

Palabras clave: Trabajo social, politización, transformación social, derechos, deuda, vivienda, desahucios.

Para citar el artículo: GARCÍA GARCÍA, Sergio y MARTÍNEZ RAMÍREZ, Xavi. Politizar el malestar profesional: ¿qué puede aprender el trabajo social del movimiento por la vivienda? *Revista de Treball Social*. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, diciembre 2018, n. 214, p. 71-88. ISSN 0212-7210.

¹ Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Facultad de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid.

² Trabajador social.

Abstract

This paper advocates politicising professional social work in view of the social emergency situation triggered by the huge rise in social inequality, and specifically owing to housing exclusion. Politicisation does not merely refer to the political influence on social reforms; rather, it is deemed a process whereby professional work becomes a driver for transformation by re-examining the roles and the establishment of alliances as horizontally as possible with the individuals directly affected by social problems and organised groups in order to clarify the structural conflict that triggers these problems. Even though housing has been the key social issue in recent decades in Spain, it is also behind the foremost collective empowerment initiatives that have taken place in our neighbourhoods and cities. Learning from these processes from the standpoint of the profession and cooperating on the methods for action from within the institution may solve the potential deadlock in the current social care model in place.

Key words: Social work, politicisation, social transformation, rights, debt, housing, evictions.

1. Condiciones para un trabajo social crítico

Entre quienes hemos ejercido el trabajo social es bastante común hacernos eco de un malestar difuso. Un síntoma de este malestar es la frustración ante la constatación de que las vidas de la gente con la que trabajamos no van como esperamos con nuestras intervenciones, lo cual muchas veces conduce a una culpabilización de esas vidas por no amoldarse a nuestras expectativas. Otro síntoma es el miedo a equivocarnos que en ocasiones sentimos ante una decisión crucial para una familia o un usuario, o directamente el miedo que sentimos ante algunas de esas personas a las que en teoría ayudamos. También suele aparecer la culpa por tener la sensación de hacer un trabajo que precisamente se aleja de ayudar a esas personas desdichadas, o simplemente la autoresponsabilización por estar haciendo un trabajo rutinario y burocrático que se aleja del espíritu creativo, rebelde y relacional que algún día idealizamos como profesión. Lo que tienen en común todos estos sentimientos de malestar (frustración, miedo y culpa) proyectados sobre las personas usuarias o sobre nuestra propia persona es la soledad, o lo que es lo mismo, la responsabilización individual de problemas que tienen causas y manifestaciones colectivas.

Como alguien dijo en una reunión organizada por el Foro ServSocial de Madrid, “las trabajadoras sociales somos lo que

hacemos”, esto es, no somos eso que se supone que deberíamos hacer (FOROSERVSOCIAL MADRID, 2018). Eso que hacemos y define nuestro ser, y que tanta frustración, miedo y culpa nos provoca, revela una pérdida del sentido de trascendencia de nuestro trabajo, una pérdida de contacto con unas metas sociales últimas de la profesión (a saber, la mejora de las condiciones materiales y relacionales de vida con el fin de reducir, si no acabar, con las desigualdades sociales). Los gritos de dolor propios de esa pérdida de sentido, de ese desencantamiento de la profesión, encuentran muchas veces la medicina anestésica de un posicionamiento cínico (descompromiso con el otro y su sufrimiento), pero también se dan situaciones en las que esos gritos se acoplan mutuamente en una caja de resonancia. Esto ocurre cuando los malestares profesionales encuentran espacios en los que ser escuchados y compartidos.

El cambio de clima que representó el 15-M (FERNÁNDEZ-SAVATER, 2012) no se limitó a las plazas más significativas de nuestras ciudades, sino que se expandió a los barrios por un lado, y a los colectivos profesionales castigados por los recortes por otro. Una de las cosas más importantes que se le pueden reconocer al 15-M fue la desestructuración de las fronteras y las identidades políticas y profesionales previas, así como el encuentro en condiciones de relativa igualdad entre gentes con posiciones de clase, género, edad u origen muy diversas. Este encuentro produjo alianzas entre profesionales de la salud y usuarios a los que se había retirado la tarjeta sanitaria o que sufrían los recortes en sus hospitales y centros de salud, todos ellos bajo una afectación común (aunque diferencial). Al contrario que en la educación o la sanidad, en la intervención social apenas han cristalizado experiencias de alianza por afectación común aunque diferencial (si acaso algunas acciones entre afectados directos de los recortes en rentas mínimas y afectados indirectos, como profesionales). Solo por fuera del trabajo social institucional y profesional, el trabajo de Baladre (GARCÍA, MUÑOZ y SÁEZ, 2017) o de Invisibles de Tetuán (HERRERA y PEREDA, 2017) han perseguido esas alianzas desde la perspectiva de un trabajo social emancipador, asimilándose a otras redes militantes que tratan de generar espacios de mestizaje (como la Red Interlavapiés en Madrid). En la intervención social institucional, estas alianzas entre usuarios y trabajadores sociales han sido mucho más limitadas, entre otras razones por las dificultades estructurales que afrontan las personas objeto de los servicios sociales para movilizarse (capital económico, cultural, social y temporal necesarios para sostener la asistencia a una asamblea), aunque quizás también por las fronteras sociocéntricas que imperan en el ejercicio del trabajo social y que nos impiden identificarnos social y políticamente (más allá de la empatía psico-individual) con las personas usuarias. No obstante, dis-

tintas experiencias en el Estado español (como Manifestaos por los Servicios Sociales en Cantabria o ForoServSocial en Madrid), así como diferentes voces individuales en las redes sociales (como Belén Navarro, Pedro Celiméndiz, etc.), comenzaron a ir más allá de los gritos de dolor señalados (frustración, miedo y culpa) y a construir nuevos relatos sobre la profesión, y sobre todo sobre los servicios sociales, que conectaban esos malestares de los profesionales con los de las poblaciones objeto de intervenciones bajo la rúbrica común de las políticas de austeridad. La peculiaridad de estas voces dispersas, desarticuladas e incoherentes entre sí, y a diferencia de los colegios profesionales (que también se han mostrado muy activos en el discurso anti-austeridad, como no podría ser de otra manera), es que encontramos un discurso –aun precario, en construcción– que reconecta con un sentido trascendente del trabajo social. Calificar el propio trabajo como “parqueo”, la propia figura profesional como “antidisturbio social” o vivir las situaciones cotidianas, como los desahucios en los que hay que “apagar fuegos”, con la sensación de que “se nos debería caer la cara de vergüenza”, implica dejar de ceder al trabajo social un cheque en blanco por el cual jamás será sometido al escrutinio público por tratarse *per se* de una “profesión de ayuda”. El mayor atrevimiento de estos grupos frente a los colegios profesionales para formular propuestas políticas de calado, como la renta básica o la reinención del trabajo social en trabajo relacional y de cuidados, en sintonía con autores como Fernando Fantova (2015), abre la puerta para introducir de lleno al trabajo social en los debates públicos sobre la desigualdad, la individualización o la crisis de cuidados.

Pero quizás lo más importante es que en estas voces, aun estando muy apegadas a las cuestiones identitarias corporativas, aparecen los embriones de la renuncia a ciertos privilegios profesionales, y por tanto, de la alianza con quienes más sufren en sus carnes la marginación, la violencia estructural y la desigualdad. Ese proceso de reflexividad, de inclusión de la propia figura profesional en el análisis de las relaciones de poder, es un paso imprescindible para la politización del malestar. Tal y como han mostrado Beatrice Bossé y Jordi Solé Blanch (2017), en los grupos de Análisis de la Práctica Profesional llevados a cabo entre trabajadoras sociales en Francia, en los últimos años emergieron una serie de dolores individuales –con características muy similares a los que podemos adivinar en España y Cataluña– que gracias al trabajo grupal lograban codificarse como problemas colectivos y estructurales. La soledad que supone trabajar en los espacios abandonados por el Estado, la obligación de objetivar en los informes, cual notarios sociales, decisiones trascendentes para los menores y las familias, el miedo a poner el cuerpo en el epicentro de las tensiones sociales, la externalización de la

intervención que interrumpe procesos y fragmenta la realidad, la creciente lógica securitaria o la gestión gerencial centrada en datos e ignorante de procesos, son solo algunas de las codificaciones del propio malestar individual inherente al rol estrictamente técnico. Sin un sentido político, lo técnico es incapaz de gestionar este raudal de situaciones estresógenas. Solo una visión política del trabajo social es capaz de reenviar el dolor individual a la potencia transformadora de los espacios colectivos. Lo que encontramos en esos grupos de Análisis de la Práctica Institucional, que funcionan como una suerte de grupos de apoyo mutuo, es una profunda politización del malestar.

Esta dimensión política del trabajo social va mucho más allá de la simple implicación política de los trabajadores sociales en política (en forma de *lobby* sobre las administraciones y los partidos, o directamente entrando a militar en organizaciones políticas y sindicales formales y en movimientos sociales). Esa forma de hacer política tiene sus evidentes precedentes en España, cuando reseñadas trabajadoras sociales participaron en la definición de los servicios sociales a nivel estatal, autonómico y municipal en la década de 1980 fundamentalmente a través de su ingreso en el PSOE. Hoy vemos también cómo son muchos profesionales los que han ingresado en las filas de nuevos partidos como Podemos o candidaturas municipalistas. Desde esas posiciones se puede visibilizar la realidad social y profesional, así como presionar para impulsar reformas en las políticas sociales, si bien casi siempre en una posición de subalternidad dentro de las organizaciones políticas y el Estado, que se corresponde con la subalternidad de lo social respecto de la economía en el capitalismo. También observamos cómo algunos trabajadores sociales participan en movimientos sociales y vecinales desde hace décadas, encontrando en esos espacios mayores posibilidades para aproximarse al trabajo comunitario y a la verdadera lucha por la justicia social.

No obstante, de lo que estamos hablando no es tanto de la posibilidad de hacer política como trabajadores sociales, sino de otra dimensión política del trabajo social, a saber: la propia politización de los entornos y situaciones profesionales. Esta es quizás una dimensión más abandonada, menos explorada en las últimas décadas en nuestro país, si bien ha habido a lo largo de la historia del ejercicio profesional multitud de situaciones de politización en las instituciones psiquiátricas, en los barrios pobres, etc. Se trata de un ensanchamiento de la idea de política para llevarla más allá de la política formal y sus parlamentos, sus políticos profesionales y sus organizaciones. Es una política de los cualesquiera (en cualquier sitio, en cualquier momento, por cualquier persona). No se trata de una alternativa excluyente a la otra dimensión política –trabajadores sociales metidos en política–, sino complementaria y

También observamos cómo algunos trabajadores sociales participan en movimientos sociales y vecinales desde hace décadas, encontrando en esos espacios mayores posibilidades para aproximarse al trabajo comunitario y a la verdadera lucha por la justicia social

con otras implicaciones más centradas en la construcción de subjetividad.

El ejercicio de nombrar de otra manera los males cotidianos a partir de la reflexión de la propia práctica al que nos hemos referido más arriba ya es una forma de politización en este sentido de subjetivación: es la politización que implica otro modo de analizar las situaciones, otro modo de comprendernos en ellas. Un punto de partida fundamental de esos procesos de subjetivación son las experiencias de lucha, las cuales cambian el mapa de identidades y las representaciones previas (GARCÉS, 2018). Jacques Rancière establece una diferencia crucial entre policía y política: la policía clasifica y ordena los cuerpos en el espacio y el tiempo, asigna identidades y funciones a cada cual, mientras que la política surge cuando alguien desarrolla percepciones diferentes de lo asignado. Solo hay política en el disenso, donde se des-clasifican los sujetos y donde los cualesquiera, los sin-parte, toman parte, participan (RANCIÈRE, 2010). Es en este disenso donde surge un nuevo nosotros a partir de la experiencia común que desbarata las identidades predefinidas: surge de la acción, no está dado (RANCIÈRE, 2014). Esta “politización de la función” implica “dejar de ser” (frente a los discursos corporativistas identitarios) para “politizar lo que se es” (o como decía alguien en el ForoServSocial, “lo que hacemos”).

Toda politización implica ir más allá de lo que se sabe y de la ilusión técnica (un saber dado), reconociendo para siempre que no hay ningún conocimiento estable y verdadero (EMA, 2013). No se trata entonces de aplicar un saber técnico a elegir en el mercado de saberes, sino de inventarlo a partir de la co-producción de un lugar y un tiempo propios. No es saber más, sino ir más allá del saber: pensar. El descubrimiento de lo precario del conocimiento técnico -lo cual no significa que sea inútil, sino insuficiente- abre la puerta a la politización del malestar profesional. Esta politización, más que disputar el poder en las instituciones (accediendo a cargos, influyendo en comisiones), trata de inundarlas y *hackearlas* para hacer inútil el poder soberano. Impugna por abajo lo que las normas y los cargos establecen. Y lo hace a partir de la generación de vínculos, vínculos entre profesionales y vínculos con los usuarios. Vínculos que son los mimbres de un común.

En la historia del trabajo social no abundan las experiencias de politización: pareciera como si la vocación profesional y el interés primigenio por la reforma social supliesen por sí mismas la necesidad de tomar partido ante la realidad. Sin embargo, sí existen algunos procesos interesantes que en ciertos momentos históricos atravesaron la disciplina y generaron situaciones de alianza entre trabajadores sociales y sujetos subalternos. En la segunda mitad del siglo XX, y de manera especial las décadas de 1960 y 1970, se desarrollaron experiencias diversas de subversión y reversión del orden social y

el papel asignado a los profesionales. Destacamos el trabajo social radical desarrollado por organizadores comunitarios como Saul Alinsky (2013), que tenía como objetivo organizar el conflicto de los vecinos de las zonas deprimidas de las ciudades norteamericanas y de sujetos minorizados por razones de racialización y clase frente a los poderes establecidos (políticos, empresariales, etc.). Mediante el sentido del humor y el análisis táctico, se entendía que el trabajo social era impotente si no explicitaba el conflicto estructural y a la vez no actuaba de forma pragmática: no se trataba de participar como modo de generar consensos, sino como modo de arrancar derechos y vencer discriminaciones. El concepto de empoderamiento parte precisamente ligado a algunas de estas experiencias de autoorganización, y se desarrolla especialmente en comunidades negras y de mujeres. Por su parte, en Latinoamérica el conocido como movimiento de reconceptualización en trabajo social (ALAYÓN, 2005) impugnó las funciones asignadas a los profesionales como adaptadores morales al sistema socioeconómico. Multitud de experiencias de educación popular a lo largo y ancho del continente latinoamericano buscaron precisamente la capacitación colectiva para hacer frente a la opresión, lo cual encontró ecos en el movimiento vecinal y de cristianos de base en la España de la Transición. Por su parte, en Europa se desarrolló una crítica a las instituciones psiquiátricas y asistenciales que dio como resultado que muchos profesionales que entendieran que sus alianzas debían fraguarse con quienes habían sido clasificados, diagnosticados e institucionalizados, y no con la propia institución (GARCÍA y RENDUELES, 2017).

Lo que tienen en común todos estos procesos de politización en la intervención social es el desbaratamiento del orden de roles y funciones asignados previamente y la desindividualización de los problemas, promoviendo un afrontamiento desculpabilizador y colectivo. Ninguno de ellos puede entenderse sin el empuje de los movimientos sociales y políticos que en cada contexto histórico contribuyeron a construir nuevos relatos, en la mayoría de casos antagónicos respecto a los hegemónicos.

Podríamos establecer una relación con la idea de “economía moral” de E. P. Thompson (TARROW, 2012), aplicada a los profesionales del trabajo social, según la cual la gente se rebela, no ya por la existencia de unos agravios, sino porque con ellos se cruza la línea de lo “aceptable”. No es exagerado establecer que con las políticas de austeridad y los recortes, y la vulneración sistemática de derechos (como el derecho a una vivienda, un derecho fundamental para poder construir cualquier proyecto de vida que merezca la pena ser vivida), se ha cruzado dicha línea en nuestro contexto neoliberal.

...el desbaratamiento del orden de roles y funciones asignados previamente y la desindividualización de los problemas, promoviendo un afrontamiento desculpabilizador y colectivo

2. El problema de la vivienda: un revelador de nuestra impotencia profesional

Tanto las experiencias de organización comunitaria y empoderamiento por parte de sujetos oprimidos (indígenas, negros, mujeres, etc.) como la politización que vivieron algunas instituciones en las décadas de 1960 y 1970, supusieron una democratización práctica de las relaciones en el trabajo social, así como cierta hegemonía de un igualitarismo radical. Lo más significativo de la cultura política profesional actual quizás sea la desaparición en el horizonte de ese igualitarismo como objetivo a alcanzar y precondition ética a partir de la cual organizar las relaciones profesionales. No es un fenómeno aislado del trabajo social, por supuesto. La pérdida del horizonte igualitario en nuestros imaginarios políticos es el correlato de un proceso material de espectacular crecimiento de las desigualdades sociales, tanto a nivel global como a nivel estatal y local (PEREDA, 2016).

A partir de la década de 1970, y aprovechando la crisis del estado del bienestar, una nueva doctrina que se había ido fraguando desde la década de 1930, el neoliberalismo, fue conquistando el alma de las instituciones públicas y los partidos políticos, tanto de centro-derecha como socialdemócratas, que habían dado estabilidad a las democracias parlamentarias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Al estado del bienestar se le acusaba de dormir el espíritu emprendedor de los trabajadores y de generar dependientes de “Papá Estado”, por lo que era necesario un giro en las políticas públicas que generase y extendiese a todos los niveles la idea de competencia (LAVAL y DARDOT, 2013). Importando las metodologías del *management* empresarial, las instituciones públicas poco a poco fueron creando las condiciones para la mercantilización de sus propios servicios públicos, los bienes naturales y comunes y las relaciones profesionales y sociales. A la oleada de privatizaciones que vivieron todos los países afectados por la doctrina neoliberal, le siguió la extensión de múltiples mecanismos burocráticos encaminados a generalizar la competencia en el seno de la clase trabajadora y de la propia ciudadanía: los sistemas de medición de la calidad, las evaluaciones continuas del trabajo, la flexibilización de las condiciones laborales y la pérdida de derechos universales son las principales técnicas de gobierno mediante las cuales se fue desmantelando el horizonte cultural igualitarista y extendiendo las subjetividades individualistas e hipercompetitivas.

En el trabajo social de nuestro país pudimos apreciar estos cambios con la extensión de las externalizaciones de multitud de servicios sociales y la concurrencia competitiva a la baja en los costes de los programas en disputa. Su traducción más palpable podemos encontrarla en condiciones laborales muy desiguales dentro de los servicios sociales, el arrasamiento de

un tejido comunitario que tuvo que devenir empresa para hacer un trabajo que ya no respondía a sus principios o la continuación, bajo otras palabras, del asistencialismo y el control como modo principal de atención social. Competencia entre entidades públicas, privadas y asociativas; competencia entre profesionales; competencia entre usuarios por los recursos escasos... La mayor obra del neoliberalismo ha consistido en trasladar a los sujetos la responsabilidad de su destino, “activando” sus energías en una continua “innovación social” que da como resultado un productivismo estéril como fin en sí mismo, completamente despojado de contenidos ligados a la transformación estructural de la sociedad.

El de la vivienda constituye un ámbito crucial en el que se dan cita las políticas neoliberales y la extensión de relaciones mercantiles y de competencia. Desde los dispositivos de atención social, quizás sea el problema de la vivienda el que mayor inestabilidad ha generado en las biografías de las personas usuarias en los últimos años. La vivienda ha sido el gran problema social en España desde el franquismo: la masiva migración rural producida entre las décadas de 1950 y 1970 produjo el desbordamiento de poblados chabolistas en los márgenes de las grandes ciudades. Ante los problemas de orden social que comenzó a representar el chabolismo, el régimen se vio obligado a lanzar el I Plan Nacional de Vivienda de 1955 y el Plan de Urgencia Social de 1957 (CARABANCHELEANDO, 2017). Además de construir multitud de poblados dirigidos a sustituir la infravivienda autoconstruida, un giro ideológico en las políticas del Ministerio de Vivienda a cargo de José Luis Arrese consistió en la famosa premisa tecnocrática de sustituir al país de proletarios que era España por un país de propietarios. La subvención para acceder a la vivienda privada, que convirtió a España en el país con mayor índice de vivienda en propiedad de su entorno, no logró sin embargo dar respuesta a la continua evolución del chabolismo en un país con amplias capas sociales empobrecidas.

Hasta la llegada de la democracia no se consiguió erradicar el problema de la vivienda autoconstruida hasta convertirlo en un problema menor y suficientemente invisibilizado a la vista de los ciudadanos, primero, y los turistas, después. Fueron los planes de realojo llevados a cabo por los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que en las décadas de 1980 y 1990 consiguieron desalojar los poblados y concentrar a sus pobladores en edificios de realojo en los barrios más empobrecidos de las ciudades. Dado el carácter de esta política de vivienda, focalizada en los más pobres, con una inversión insuficiente (solo polígonos concentrados en los barrios más baratos) y con un enfoque de control (diseño de espacios funcionales a labores policiales y de segregación social), lejos de producir situaciones de cohesión social proliferaron los recelos entre sujetos etnificados y no etnificados y la compe-

Desde los dispositivos de atención social, quizás sea el problema de la vivienda el que mayor inestabilidad ha generado en las biografías de las personas usuarias en los últimos años

tencia entre pobres por lograr las escasas viviendas en relación a las necesidades. Coincidiendo con los problemas causados por el paro y la heroína, estos realojos rompieron las precarias comunidades de vida de los poblados al tiempo que introdujeron bombas de relojería para la convivencia en lo que se han designado como las periferias guetificadas (CARABANCHELEANDO, 2017). Se daba así el pistoletazo de salida a las contemporáneas relaciones de competencia que protagoniza buena parte de la vida diaria en los barrios empobrecidos.

Pero es con el desarrollo de la burbuja inmobiliaria de finales de la década de 1990 y los 2000, cuando se comienzan a gestar los actuales problemas de vivienda. La liberalización del mercado de la vivienda de 1997, recién aterrizado José María Aznar en la presidencia del gobierno español, así como el privilegio del ladrillo como motor de la economía, activaron el mercado hipotecario en todas las capas sociales, incluidas las más precarizadas (formadas principalmente por migrantes llegados para cubrir a bajísimo coste laboral esas mismas necesidades de construcción y otros servicios). Con el precio de la vivienda desbocado por la nula interferencia pública en el mercado (ni regulación de precios ni políticas de vivienda significativas), las hipotecas firmadas por la población precarizada (que sin embargo había logrado una mínima estabilidad como para comprar una vivienda) se convirtieron en la fuente del quiebre de cientos de miles de proyectos vitales y familiares una vez estalló la burbuja en 2008.

Los desahucios se convirtieron en el problema social más acuciante de la Gran Crisis, desposeyendo los bancos a los habitantes de sus casas, construyendo tapias y chapas y llenando de fantasmas las comunidades de vecinos de los barrios más humildes. El desplazamiento de población producido por los desahucios, ya no solo los hipotecarios, sino también los del alquiler de vivienda pública y privada, hizo que en los barrios más castigados por la crisis y abandonados institucionalmente se concentrasen las familias expulsadas de otras zonas de las ciudades, produciendo un nuevo fenómeno masivo que ha desestabilizado las frágiles relaciones vecinales en contextos de extrema precariedad: las ocupaciones. Pese a que la mayor parte no producen problemas de convivencia, las ocupaciones se han convertido en el símbolo de la guerra entre pobres que los partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha tratan de explotar para obtener réditos. Son también el mecanismo perverso que los fondos buitres y grandes inversores de vivienda utilizan para generar condiciones de vida invivibles en muchos edificios y calles a través de la tolerancia a las ocupaciones con fines de narcotráfico, buscando así expulsar a sus habitantes originales para encontrar clientes más rentables (con apartamentos turísticos en los centros o reventa de viviendas baratas en las periferias).

Pese a que la mayor parte no producen problemas de convivencia, las ocupaciones se han convertido en el símbolo de la guerra entre pobres que los partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha tratan de explotar para obtener réditos

Como podemos apreciar quienes trabajamos o hemos trabajado en la atención directa, el trabajo comunitario o la gestión de proyectos de intervención, el problema social de la vivienda se nos cruza en las situaciones vitales más precarias que encontramos (en forma de amenaza de desahucio, de sinhogarismo sobrevenido, de ocupación en precario, de cortes de suministros, de neochabolismo, etc.). Vemos las huellas del neoliberalismo en cada una de sus manifestaciones. Por un lado, observamos cómo una necesidad básica, incluso reconocida como derecho constitucional, es abandonada a la suerte del mercado, incumpliendo las instituciones públicas la garantía de uno de los derechos humanos más básicos. Esa mercantilización de una necesidad básica extiende las relaciones de competencia no solo entre propietarios y especuladores, sino también entre quienes solo quieren ejercer su valor de uso, ya sea en el acceso (adjudicación pública o compra y alquiler de vivienda privada) o en el disfrute (relaciones de desconfianza vecinal producidas por los realojos o las ocupaciones). Vemos además cómo un problema social de dimensiones estructurales (eje de la economía de un país), es metabolizado en el discurso hegemónico como un problema individual que otorga la responsabilidad a la familia o persona en el fracaso o el éxito de la satisfacción de esta necesidad básica. La deuda es, más que un mecanismo de intercambio mercantil, un dispositivo de domesticación de la voluntad. Observamos además cómo en los desahucios se evidencia la soledad a la que somos condenados en una sociedad que ha minado la protección social y comunitaria: soledad de la familia que sufre el desahucio, pero también soledad de vecinas y vecinos que ven sustituirse a una familia por una tapia o por nuevos vecinos ocupantes en precario.

Pero el neoliberalismo no solo habita en forma de competencia y subjetivación de la responsabilidad individual, sino que también opera en las respuestas institucionales al problema de la vivienda en cuestión. Una gestión basada en el manejo de las situaciones de riesgo y emergencia (ÁVILA y GARCÍA, 2013) trabaja únicamente sobre los síntomas del problema, activando recursos extraordinarios sobre las situaciones extremas -nunca ejercicio de derechos-, y siempre a condición de que dichos recursos serán puntuales. Las ayudas de emergencia para frenar un desahucio o un corte de suministros, los recursos para personas en situación de calle, los programas de realojo gestionados por los servicios sociales proporcionados por las mismas entidades bancarias que desahucian o los proyectos de convivencia intercultural en los barrios empobrecidos -precisamente donde se encuentran las casas tapiadas y ocupadas que algún día habrá que sacar al mercado- obran bajo esa lógica de no intervenir sobre las causas del problema, sino sobre los posibles efectos adversos (para el propio mercado, para la imagen de la marca ciudad o para el

orden social). Esta gestión actuarial de riesgos constituye la continuación por otros medios a-morales del viejo asistencialismo liberal, desposeyendo a las personas usuarias o destinatarias de la intervención de sus saberes y de su poder: solas, culpabilizadas, endeudadas y amenazadas, las familias que sufren la precariedad residencial no pueden esperar de los trabajadores sociales otra cosa que no sea, en el mejor de los casos, la escucha, una ayuda de emergencia, la gestión de una renta mínima o la intervención sobre las relaciones familiares y los menores sometidos al estrés de la extrema precariedad. Nada parecido a una intervención preventiva del malestar, que en el caso que nos ocupa no es otra que la evitación del mismo desahucio y su amenaza (SALES, 2016).

Llegados a este punto del relato, muchos lectores podrán llevarse la impresión de que a este retrato crudo le faltan pinceladas de tonalidades más alegres que se dan en torno al problema de la vivienda. Esas pinceladas, en ocasiones el principal apoyo en la intervención de unos trabajadores sociales también sometidos a la extrema soledad en el manejo de situaciones personales y familiares complicadísimas, proceden de los movimientos sociales (organizaciones) y de lo social en movimiento (relaciones informales de reciprocidad). Si la vivienda ha sido el gran problema de la cuestión social en España en los últimos 60 años, también ha sido el germen de los más grandes movimientos sociales en la misma época: el movimiento vecinal en la década de 1970 y el movimiento antidesahucios a finales de la década pasada. Estos movimientos han operado de una forma inestimablemente más eficaz que el trabajo social institucional en una doble dirección. Por un lado dando cobertura a la multiplicidad de necesidades individuales mediante la lucha colectiva, logrando mediante la acción directa y la reivindicación la paralización de desahucios o la activación de políticas más proteccionistas. Y por otro, consiguiendo generar nuevas comunidades, vínculos solidarios y apoyo mutuo allí donde solo había explotación y soledad. Se trata de un ejemplo histórico como pocos de un proceso de empoderamiento: el sentimiento de pertenencia e identidad en la lucha y autoorganización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no solo genera apoyo mutuo, sino que implica empoderamiento sociopolítico que derivará en la acción de la comunidad hacia tres posibles estrategias que han de posibilitarle la mejora de sus condiciones y la toma del control de sus vidas: la incidencia, la resistencia y la disidencia.

¿Qué podemos aprender desde el trabajo social profesional de las formas de hacer de organizaciones como la PAH?

3. Aprendiendo del movimiento por la vivienda: la PAH

Este último apartado queremos centrarlo en el análisis de la PAH como uno de los movimientos sociales más potentes en los últimos años, y al mismo tiempo como una de las experiencias de trabajo social no institucional que puede servirnos de referencia en el trabajo social institucional. No pretendemos partir de una relación dicotómica entre estos dos ámbitos, sino más bien desde las posibilidades de cooperación y aprendizaje mutuo.

Muchas compañeras trabajadoras sociales han vivido en extrema soledad y con gran impotencia la brutal crisis hipotecaria y de alquileres que ha dejado a cientos de miles de familias en la calle, más de 600.000 desahucios desde 2007. Una soledad e impotencia que ha implicado, en la mayoría de casos, el bloqueo y la incapacidad de generar alianzas con estas personas y los movimientos sociales que se han organizado en torno a esta problemática para buscar soluciones conjuntas, para estimular el tejido comunitario, para desindividualizar el problema y hacerlo colectivo, en definitiva para revertir las relaciones neoliberales que extienden la competencia a esferas de la vida que deberían estar socialmente aseguradas y que convierte un problema estructural en un problema individual.

Muchas compañeras trabajadoras sociales han vivido en extrema soledad y con gran impotencia la brutal crisis hipotecaria y de alquileres que ha dejado a cientos de miles de familias en la calle

El inicio de la PAH, definido por algunos de sus protagonistas como el paso, por parte de las personas afectadas, “del Prozac al empoderamiento” (COLAU y ALEMANY, 2012), puede caracterizarse como la creación de un diagnóstico compartido de la situación de la vivienda que redefinió conceptos como deuda, crisis o derechos ciudadanos. No se trata ya de que las personas amenazadas de desahucio por impago involuntario sean irresponsables, ignorantes o hayan enloquecido, sino que son víctimas de una estafa organizada por banqueros y políticos que han estado promoviendo el endeudamiento y la compra durante décadas para maximizar el beneficio (MANGOT, 2013).

Esta redefinición de la crisis supuso que muchas personas pasaran de sentirse avergonzadas, abatidas o incluso optaran por el suicidio, a que muchas de ellas se organizaran y reivindicaran sus derechos. Socializar el concepto de deuda evitó que todo el peso recayera en la responsabilidad individual, convirtiéndolo en un problema colectivo y estructural.

Existen algunos elementos clave en trabajo social de la PAH y que pueden ser el punto de partida de la reflexión profesional. El primero de ellos es la creación de espacios de experiencia compartida donde las personas visualizan por sí mismas que sus problemas no son cuestiones individuales sino colectivas. En segundo lugar, un enfoque de derechos que permite interpretar dichas experiencias como la vulneración de las garantías sociales de todas y todos nosotros, y ante las cuales

el Estado incumple sistemáticamente sus compromisos y obligaciones. En tercer lugar, la generación de empoderamiento a través de herramientas que capacitan a la gente, de manera que puedan defenderse por sí mismas, sin tener que delegar en nadie. En cuarto lugar, la práctica en el cuerpo a cuerpo de la solidaridad y el apoyo mutuo, de manera que nunca nadie más se sienta sola.

Cada uno de estos elementos se trabaja mediante distintas herramientas. Una de ellos son las asesorías colectivas semanales, donde se hace la acogida las personas que llegan por primera vez y se les explica qué es la PAH y cómo funciona, las fases de ejecución hipotecaria y qué se puede hacer en cada una de ellas y la apertura de un espacio de casos para que quien quiera explique su situación personal o pueda aclarar cualquier duda. En esta primera acogida colectiva se deja clara la filosofía de la PAH y la necesidad de la implicación de cada persona en la resolución de su caso, así como la necesidad de apoyar al resto en la resolución de los suyos o la implicación en los cambios legislativos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda: no se trabaja o se asume ningún caso si la persona no cumple estos principios. Esta primera acogida también se realiza en los servicios sociales cuando un usuario acude a ellos por primera vez, pero siempre se hace de forma individual sin ningún espacio colectivo donde poder trabajar esa demanda. Las asesorías colectivas aplicadas a los servicios sociales de atención primaria podrían ser un primer paso hacia un trabajo social generador de vínculos.

La PAH es un dispositivo sencillo y fácil de replicar, con muy pocos requisitos: asambleario, apartidista e independiente, gratuito y pacífico

La PAH es un dispositivo sencillo y fácil de replicar, con muy pocos requisitos: asambleario, apartidista e independiente, gratuito y pacífico. Una apuesta por la comunicación horizontal, en el sentido más amplio. Quiere ser un instrumento real para la mayoría social afectada por la estafa hipotecaria, por lo que habla el lenguaje de la gente, y usa todos los medios posibles para comunicar, ya sean tradicionales o alternativos, así como las nuevas redes sociales. Y una estrategia compleja, que articula objetivos a corto, medio y largo plazo, así como múltiples niveles: interpelación a las administraciones, acciones judiciales, incidencia internacional, acción directa y desobediencia civil como mecanismo de auto tutela de los derechos vulnerados.

Cuando una familia acude a la PAH después de haber realizado todo el periplo por los servicios sociales y que le hayan dicho que no hay viviendas y que no pueden hacer nada para garantizarles ese derecho fundamental, en la PAH se encuentra con el mensaje de "Sí se puede". Este mensaje tiene un doble sentido: por un lado neutraliza el discurso hegemónico que establece la "imposibilidad" del cambio en esta materia, como si de una ley natural -la del mercado-, se tratase, y por otro transmite performativamente un mensaje potenciador frente a la indefensión aprendida. La PAH hace efectivo el derecho

a la vivienda mediante los Stop Desahucios, parando los desahucios de las familias que van a ser desahuciadas mediante la convocatoria de concentraciones en las puertas de las viviendas para hacer resistencia pacífica cuando aparezca la comitiva judicial y al mismo tiempo visualizar la barbaridad que supone desahuciar a una familia y dejarla en la calle, muchísimas veces con menores. Y si ha sido imposible parar el desahucio, realojando a la familia a través de la Obra Social de la PAH, que recupera pisos de entidades financieras rescatadas por el Estado (60.000 millones de euros que se dan por perdidos), para posteriormente abrir una negociación para conseguir un alquiler social que proporcione estabilidad y garantice el derecho a una vivienda. Pero además del apoyo mutuo en las situaciones individuales, otro de los elementos claves de la PAH es, como en el trabajo social primigenio que trataba de incidir en las reformas sociales de calado, la búsqueda de cambios a largo plazo, movilizándose y presionando para cambiar la Ley hipotecaria española (una ley anómala y que no existe en ningún país del mundo). Ese trabajo de incidencia política se sintetiza en “las 5 de la PAH”: 1) Dación en pago retroactiva y eliminación y compensación por cláusulas abusivas; 2) Alquiler asequible para garantizar estabilidad y precios adecuados; 3) Stop desahucios, para que no haya ni uno más; 4) Vivienda social para realojar familias en pisos vacíos en manos de la banca; 5) Suministros básicos garantizados para que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas. Se trata de la autotutela de derechos y de hacer efectivo el derecho a la vivienda tal y como recoge nuestra actual legislación.

4. Apuntes finales

El trabajo social de la PAH nos recuerda en numerosos elementos al trabajo crítico y de autoorganización que plantea la defensa de las comunidades excluidas de los derechos básicos a través de la organización comunitaria planteado por Saul Alinsky. Decía Antonio Gramsci que, en situaciones de crisis económica y política, las clases subordinadas activan una serie de mecanismos de defensa y de acción colectiva propias, destinadas a hacer frente a las pérdidas o daños que les produce dicha crisis, al mismo tiempo que a cuestionar la legitimidad del sistema capitalista (GRAMSCI, 1971). Se activan, así, los mecanismos destinados a construir una contra-hegemonía que cuestiona el relato de las clases dominantes. Uno de los agentes que puede impulsar estos procesos contra-hegemónicos son las organizaciones de la sociedad civil (AGUILAR, 2013).

Entender el derecho a la vivienda como un derecho humano supone romper con cualquier neutralidad. Trabajar seriamente sobre el problema de la vivienda implica reconocer que

es absolutamente necesaria e imprescindible en el proceso vital de las personas: carecer de ella, y por tanto del derecho a una vivienda, supone para la persona quedar excluida de otros derechos que se articulan mediante este.

Como ya hemos comentado, podemos afirmar que la exclusión social en nuestros días pasa de manera central por el elemento de la vivienda: hipotecas impagables, desahucios y deudas de por vida nos llevan a situaciones de infravivienda, pisos patera, reagrupaciones familiares, hacinamiento, ocupaciones en precario... Este problema no solo está afectando a los más desfavorecidos, quienes se visualizan como los clientes habituales de los servicios sociales, sino que se está transversalizando y extendiendo a personas y familias jóvenes, mayores (mayoritariamente avaladores de los primeros), trabajadores cualificados y precarios, tanto a inmigrantes como a población autóctona. Raro es encontrar a una persona que no tenga a un familiar o amigo afectado por este efecto de empobrecimiento social que supone la exclusión residencial.

Ante esta situación, nos debemos plantear por lo menos algunas preguntas: ¿estamos siendo capaces de comprender desde el trabajo social estas nuevas problemáticas? ¿Estamos actuando de otra forma que no sea la de aprisionarnos en el embudo burocrático y el binomio necesidad-recurso? Ante estas nuevas problemáticas que afectan a amplios sectores de la población y para los que no existe una solución individual, ¿no habrá llegado el momento de salir del despacho, y darle el valor y la potencia de transformación, capacitación y empoderamiento que tiene el trabajo comunitario, no solo en su vertiente territorial, sino en su capacidad de movilizar comunidades de afectación? ¿Somos capaces de valorizar otros *saberes menores* (DELEUZE y GUATTARI, 1997) y otras formas de hacer que, desde fuera del trabajo social institucionalizado, están intentando dar respuesta a estas nuevas problemáticas?

Desde la profesión del trabajo social necesitamos cambiar de paradigma, salir del *impasse* al que nos ha llevado la crisis, la austeridad y la falta de recursos. Esto pasa por aceptar que el trabajo individual ofrece unas respuestas muy pobres ante problemas estructurales. En una sociedad hiper-compleja, en la que cada vez es más difícil descifrar sus claves de funcionamiento y en la que la seguridad ha pasado a convertirse en incertidumbre permanente, debemos también experimentar, cambiar y modificar(nos) si queremos apostar por los objetivos y valores igualitarios de la profesión. Al mismo tiempo debemos renunciar a la centralidad que hasta ahora nos había dado la posición de técnico de la intervención social, asumir que cada vez debemos trabajar más en red, aportando nuestros saberes técnicos y metodológicos a procesos colectivos y salir de la prisión del despacho, y preguntarnos constantemente si no estaremos utilizando viejas herramientas para dar respuesta a nuevos problemas (ZAMANILLO, 2011). Se trata

de reconocer de una vez por todas que los procesos sociales que se construyen de forma autónoma, sin contar con los “especialistas” de la intervención social, pueden tener más capacidad para crear común, tejer lazos, construir redes y encontrar soluciones colectivas a los problemas individuales y visualizarlos. Las trabajadoras y los trabajadores sociales deberíamos empezar a asumir estos cambios y empezar el cambio por nosotros mismos para adaptarnos a la nueva realidad y ser conscientes de lo mucho que podemos aportar a ellos. De lo contrario, seguiremos estancados en la queja permanente por la falta de recursos, enfrentados a los usuarios que nos exigirán cada vez más y con una sensación de impotencia y vacío difícil de gestionar.

Quienes escribimos este texto coincidimos con otras personas compañeras de militancias dedicadas profesionalmente a la intervención social en una valoración retrospectiva y comparativa: sentimos que hemos hecho más trabajo social en la PAH y otros colectivos que trabajando en dispositivos como servicios sociales. La pregunta que se formula es: ¿cómo hacer del lugar profesional un espacio de politización que permita sentir que estamos haciendo un trabajo social trascendental?

Bibliografía

- AGUILAR, Salvador. Del miedo y la perplejidad al ciclo de acción colectiva. Reacciones Populares a las crisis y la austeridad, 2007-2012, *Anuari del conflicte Social 2012* (Observatorio del Conflicto Social, Universidad de Barcelona), 2013, 2, 947-982.
- ALAYÓN, Norberto (coord.). *Trabajo Social latinoamericano, a 40 años de la Reconceptualización*. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2005. ISBN: 9508022000.
- ALINSKY, Saul. *Tratado para radicales. Manual para revolucionarios pragmáticos*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2013. ISBN 13: 978-84-96453-71-5.
- ÁVILA CANTOS, Débora; GARCÍA GARCÍA, Sergio. Entre el riesgo y la emergencia: insinuaciones policiales en la intervención social, *Revista de Antropología Social*, 2013, n. 22, 59-82. ISSN: 1131-558X
- BOSSÉ, Beatrice; SOLÉ BLANCH, Jordi. *Análisis de la práctica profesional. Un lugar para pensar*. Barcelona: UOC (“Col·lecció Laboratori de Educació Social”), 2017. ISBN: 9788491169352.
- COLAU, Ada; ALEMANY, Adrià. *Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda*. Barcelona: Cuadrilátero de Libros, 2012. ISBN: 9788494003738.
- COLAU, Ada; ALEMANY, Adrià. *¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria*. Barcelona: Destino, 2013. ISBN: 9788423346776.
- CARABANCHELEANDO. *Diccionario de las periferias. Métodos y saberes autónomos desde los Barrios*. Madrid: Traficantes de Sueños. ISBN: 9788494719653.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos, 1997. ISBN: 9788485081950.
- EMA LÓPEZ, José Enrique. Apunte sobre psicoanálisis y política: de la impotencia a la imposibilidad, *Constelaciones: Revista de Teoría Crítica*, 2013, v. 5, 387-393. ISSN-e: 2172-9506

Bibliografía

- FANTOVA AZCOAGA, Fernando. Crisis de los cuidados y servicios sociales, *Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales*, 2015, n. 60, 47-62. ISSN: 1134-7147.
- FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador. ¿Cómo se organiza un clima?, *Público*, 09/01/2012. Disponible en línea en: <<http://blogs.publico.es/fueradelugar/1438/?como-se-organiza-un-clima>>.
- FORO SERVSOCIAL MADRID. El sistema público de servicios sociales hoy, ¿qué podemos aportar las y los profesionales para la reconstrucción de su objeto? *Cuadernos de Trabajo Social*, 2018, v. 31, n. 2, 579-588.
- GARCÉS, Marina. *Ciudad Princesa*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2018. ISBN: 9788417088873.
- GARCÍA ESCAMILLA, Enrique; MUÑOZ RODRÍGUEZ, David; SÁEZ BAYONA, Manuel. El trabajo social como opción de lucha contra la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social: trayectorias y estrategias de la coordinación Baladre, *Cuadernos de Trabajo Social*, 2017, v. 30, n. 2, 377-388.
- GARCÍA GARCÍA, Sergio; RENDUELES MENÉNDEZ DE LLANO, César. Hacia un nuevo trabajo social crítico: el gobierno de lo social en la era neoliberal, *Cuadernos de Trabajo Social*, 2016, v. 30, n. 2, 243-260.
- GRAMSCI, A. *Selections from the Prison Notebooks*. Nueva York: International, 1971. ISBN: 9780717803972.
- HERRERA PINEDA, Ivonne; PEREDA OLARTE, Carlos. Invisibles de Tetuán (Madrid). Hacia una práctica subversiva de apoyo mutuo en contextos de exclusión, *Cuadernos de Trabajo Social*, 2017, v. 30, n. 2, 389-402. ISSN: 0214-0314.
- LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2013. ISBN: 9788497847445.
- MANGOT SALA, Lluís. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De la crisis a la estafa. Del Prozac al empoderamiento, *Clivatge*, 2013a, 2, 56-88.
- MANGOT SALA, Lluís. Cronología: burbuja, crisis y PAH, *Anuari del conflicte Social 2013*, 2013b, 272-283.
- PEREDA OLARTE, Carlos (Colectivo IoÉ). *Desigualdad y dominación en España. Reflexiones a partir del Barómetro Social de España*, 31/03/2016. Disponible en línea en: <https://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/179>.
- RANCIÈRE, Jacques. *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago Ediciones, 2010. ISBN: 9788496720923.
- RANCIÈRE, Jacques. Potencias y problemas de una política del 99%, entrevista con Jacques Rancière, *Eldiario.es*, 24/01/2014. Disponible en línea en: <https://www.eldiario.es/interferencias/Ranciere-politica_del_99_6_221587865.html>
- SALES CAMPOS, Albert. Sinhogarismo y exclusión social, *Revista de Treball Social*. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, 2016, n. 209, 9-25. ISSN: 0212-7210.
- TARROW, Sidney. *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza, 2012. ISBN: 978-84-206-0958-4.
- ZAMANILLO, Teresa (dir.). *Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del trabajo social*. Barcelona: Editorial Talasa, 2011. ISBN 978-84-96266-37-7.